



DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SOCIAL: DESAFÍO PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

En las últimas dos décadas, Honduras ha experimentado un crecimiento económico promedio del 3.7%, sin embargo, este ha sido insuficiente para impulsar un proceso de desarrollo sostenible y ha estado caracterizado por depender en gran parte del consumo privado motivado por el creciente papel de las remesas en la economía.

El consumo privado representa uno de los principales motores que dinamizan la economía, dado que, en promedio, este ha contribuido en un 3.34% al crecimiento económico y al 75.1% del Producto Interno Bruto. Su importancia radica en que proporciona estímulos e incentivos para el sector empresarial que impulsan la producción de bienes y servicios, la generación de empleo, la creación de oportunidades de crecimiento y expansión de mercados.

Por su parte, las remesas familiares generan un efecto estabilizador en la economía, contribuyendo de manera significativa a reducir el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, garantizando que las reservas internacionales netas mantengan niveles adecuados de financiamiento de las importaciones, además, distribuyen recursos a diferentes sectores aumentando la capacidad de consumo de los receptores.

Por otro lado, la inversión ha presentado niveles de crecimiento desigual y fluctuante limitando en cierta medida, las oportunidades de mayor avance económico y social, reflejándose en un creciente sector informal, deterioro de la calidad de los puestos de trabajo y una continua migración, entre otros, exacerbando las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión. Esto se refleja en que la inversión productiva nacional tanto

pública como privada haya mantenido una contribución al crecimiento económico de sólo 1.31% y un peso del 23.41% del PIB. Este bajo desempeño se ha debido en parte a los efectos de la vulnerabilidad de factores externos a la inversión, así como a los distintos fenómenos naturales que se suscitan año tras año y a los problemas latentes de baja productividad de los factores (capital y trabajo) que inciden en una insuficiencia de acumulación de capital (Suazo, 2022).

Asimismo, la inversión extranjera directa (IED) también es un factor importante para el crecimiento económico del país. Sin embargo, esta ha mostrado una tendencia similar a la inversión nacional con tasas de crecimiento fluctuantes que han promediado un 3.55%, representando, además, un 4.9% del PIB. Este comportamiento ha sido incidido en parte por factores como la débil seguridad jurídica, la corrupción, la burocracia y la ineficiencia administrativa que han generado barreras para los inversores extranjeros; lo cual, sumado a la inadecuada infraestructura productiva, la inseguridad ciudadana, mal uso de los recursos naturales y las deficiencias en el capital humano generan restricciones adicionales al clima de inversión extranjera.

El panorama anterior refleja sólo una parte de los desafíos que enfrenta Honduras en el ámbito económico, sumados a estos se observa un incremento en las condiciones de pobreza y desigualdad, persistiendo como las grandes problemáticas del país, mismas que tienen profundas implicaciones para la calidad de vida de la población, restringiendo y obstaculizando el avance hacia un desarrollo sostenible y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.

Figura 1. Desafíos a que se enfrenta Honduras en la búsqueda del desarrollo económico y social



Fuente: Elaboración propia.

La pobreza ha reflejado una de las problemáticas que más afecta a la población, dado que aproximadamente siete de cada diez hogares viven en situación de carencia económica y una parte significativa se encuentra sin posibilidades de satisfacer plenamente sus necesidades básicas (INE, 2021). Esta realidad implica que las personas sin acceso a fuentes de trabajo formales se vean obligadas a buscar distintas alternativas de sobrevivencia para hacer frente a necesidades fundamentales como alimentación, vivienda, educación y salud.

La falta de acceso a servicios básicos y la baja calidad de algunos de estos es especialmente preocupante, ya que limita las oportunidades de la población y perpetúa el ciclo de la pobreza. Sumado a lo anterior, la privación a las necesidades esenciales se manifiesta de manera desigual entre los diferentes grupos poblacionales, acentuándose en las comunidades indígenas, zonas rurales y urbanas

marginales, las cuales tienden a ser la más afectadas, enfrentando barreras adicionales como la discriminación y falta de empleo formal, entre otros.

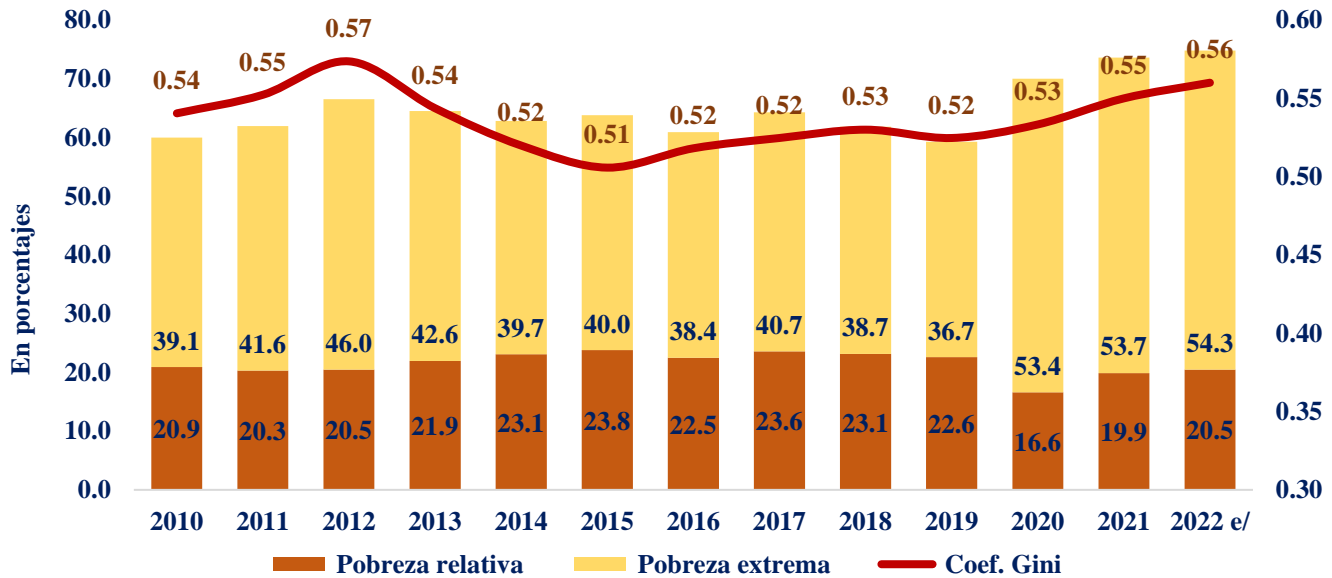
La desigualdad económica y social representa otro de los desafíos para el país, debido a que existe una brecha significativa entre los sectores más ricos y los más pobres de la población, lo cual se refleja en una distribución desigual de los ingresos, los activos y las oportunidades de desarrollo personal, situación que refleja el coeficiente de Gini, mismo que se ha mantenido en promedio en un 0.53, indicando una amplia disparidad en términos económicos que incide en que se perpetue la exclusión social y limite las posibilidades de movilidad social ascendente.

De manera similar, la desigualdad se manifiesta en distintas dimensiones, como ser la falta de acceso a una educación, salud, protección social y empleo de calidad,

así como a la exclusión social basada en género, raza, origen étnico u otras características personales. Además, de ello se reflejan disparidades geográficas que restringen el desarrollo económico, acceso a servicios básicos,

infraestructura adecuada y otras oportunidades que pueden conducir a la concentración de recursos productivos en áreas urbanas, dejando rezagadas a las zonas rurales y urbano marginales.

Gráfico 1. Coeficiente de Gini y Pobreza en Honduras, 2010 - 2022



Fuente: Elaboración propia, con datos del INE.
e/ Estimación IIES-UNAH

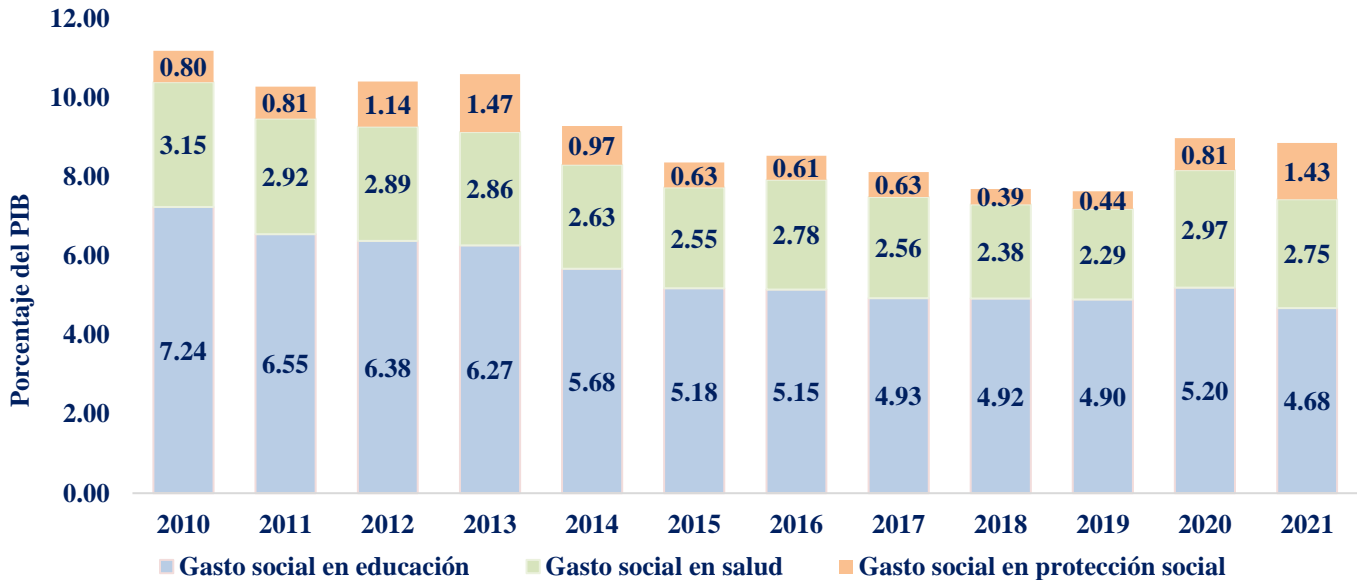
Históricamente, en Honduras el gasto social se ha encontrado por debajo del promedio de América Latina, implicando que los desafíos en educación, salud y protección social no han sido objeto de interés en la agenda pública del país. Los sectores más socialmente afectados se ven limitados en términos de cobertura, calidad, eficiencia e impacto de los programas, servicios y proyectos sociales, mismos que no han tenido un efecto significativo en las condiciones de vida de la población.

Lo anterior se visualiza, en que en los últimos 21 años, los montos del gasto social en educación se han visto incrementados, pero estos han resultado ser insuficientes para atender las necesidades educativas de la población, en especial, en términos de cobertura, asistencia, deserción e infraestructura educativa, entre otros; las cuales, lejos de verse mejoradas, han puesto en una difícil situación a la

población que no puede acceder a servicios educativos de calidad, a la vez que genera rezagos en aquellos niños y niñas más vulnerables, incidiendo de tal manera, en que la tasa de analfabetismo se mantenga en niveles altos, promediando, un 13.5%, restringiendo aún más el acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional, además, de perpetuar la exclusión y la desigualdad.

El sistema de salud público ha presentado altos niveles de deficiencia, manifestándose como un sector que atraviesa severas dificultades, producto de que sólo se ha destinado, en promedio, un 2.77% del gasto en relación con el PIB. La insuficiente inversión en salud ha tenido consecuencias directas en la calidad y disponibilidad de dichos servicios, lo que ha llevado a una escasez de suministros médicos, medicamentos y equipamiento dificultando la atención oportuna y de calidad para la población.

Gráfico 2. Gasto Social por principales componentes con relación al PIB, 2010 - 2021



Fuente: Elaboración propia, con datos de SEFIN y CEPAL.

La falta de recursos financieros y la ineficiencia en la gestión del gasto social ha limitado la cobertura y el alcance de los programas de protección social, dejando a una cantidad de personas sin acceso a la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, esto ha constituido una problemática latente que se complementa con la falta de coordinación entre diferentes instituciones, misma que incide en que la corrupción y la falta de transparencia afecten la efectividad y el impacto de estos programas.

Es importante entender que la pobreza, la desigualdad y exclusión son realidades que caracterizan el panorama socioeconómico del país, mismos que restringen un desarrollo pleno como tal. Además, existe una marcada diferencia entre las zonas urbanas y rurales, ya que esta última presenta mayores niveles de pobreza en comparación con las primeras.

La falta de inversión en infraestructura, agricultura sostenible y acceso a servicios básicos agrava aún más esta situación, misma que se profundiza con la corrupción que afecta negativamente la eficiencia y transparencia de las instituciones, dificultando la implementación de políticas

efectivas para reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población.

Los gobiernos han implementado en su momento, algunas medidas para abordar la desigualdad y exclusión como programas de asistencia social y políticas de desarrollo económico. Sin embargo, los resultados han sido limitados y persisten los desafíos estructurales que contribuyen a un panorama socioeconómico adverso. En este sentido, resulta importante considerar las siguientes recomendaciones:

1. **Priorizar acciones y programas que promuevan el acceso a servicios de salud, educación y empleo**, mismos que permitan focalizar políticas en la reducción de la brecha geográfica entre zonas rurales y urbanas, garantizando que todas las regiones del país tengan acceso equitativo a estos derechos fundamentales de la población. Esto, además, implica implementar estrategias que mejoren la infraestructura productiva y los servicios públicos en áreas donde la falta de estas oportunidades agrava la desigualdad y pobreza.



2. **Promover y fomentar una reforma integral en el sistema educativo en todos los niveles**, desde el primario hasta el superior, así como en la capacitación técnica y empresarial por medio de la implementación de políticas efectivas que garanticen oportunidades educativas para la población, reduciendo con ello, la desigualdad y mejorando las perspectivas de empleo, con miras a impulsar el progreso económico y social del país.
3. **Propiciar políticas públicas que estimulen e impulsen el emprendimiento y la innovación en el sector privado**, permitiendo no solo que estas puedan generar empleos, sino que también contribuyan a reducir la desigualdad económica y por ende la pobreza y exclusión social. Para ello, es necesario que se facilite el acceso al financiamiento a empresas existentes y los emprendedores para que puedan desarrollar sus ideas y proyectos de manera efectiva.
4. **Fomentar políticas de inclusión financiera** que permitan que las personas de bajos ingresos accedan a servicios, como cuentas de ahorro, créditos bancarios, seguros, entre otros, con el propósito de generar una cultura de ahorro, mejorar sus oportunidades de inversión en actividades productivas, así como su calidad de vida.
5. **Fortalecer el sistema de protección social** mediante la ampliación de programas y proyectos que garanticen el acceso a servicios básicos de calidad para la población más desfavorecida y vulnerable, contribuyendo a su vez, a reducir las brechas de desigualdad y promover una mayor equidad y bienestar general en el país.
6. **Potenciar el uso y tenencia de la tierra por medio de la implementación de políticas que fomenten la utilización productiva** de la misma y que faciliten el acceso a los pequeños productores mediante figuras como la asociatividad, la coinversión y el arrendamiento, entre otros, permitiendo con ello,

impulsar una mayor inclusión y equidad en el sector agropecuario, mejorando las condiciones de vida de los productores y contribuyendo a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del país.

7. **Fortalecer las medidas de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas** para garantizar el uso justo y equitativo de los recursos públicos, esto implica implementar prácticas y controles efectivos que promuevan su gestión responsable y transparente, al mismo tiempo que permitan incrementar la confianza de la sociedad en la administración y la distribución equitativa de estos.

Enfrentar estos desafíos requiere un enfoque integral que aborde tanto los factores económicos como los sociales y políticos. Es fundamental promover la inversión en infraestructura productiva, mejorar la calidad de la educación y la salud, fortalecer las instituciones públicas y combatir la corrupción. Asimismo, se deben implementar políticas que fomenten la inclusión social, reduzcan la desigualdad y promuevan un desarrollo sostenible y equitativo en el país.

Bibliografía

- CEPAL. (2010-2021). Honduras: gasto social del gobierno central (En porcentajes del PIB y el gasto público total). De <https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/paises/honduras>
- Instituto Nacional de Estadísticas (2010-2021). Cuadros de pobreza e ingresos.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022). Estado de derechos, Fundamento de la transformación 2022-2030. Honduras. De <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-12/pnud-hn-idh-honduras-2022.pdf>
- Secretaría de Finanzas (2010-2021). Memorias Institucionales Anuales.
- Suazo, J. (2022). Efectos de la pandemia en Honduras: Retos y oportunidades para el desarrollo económico y social. ECONOMÍA Y FINANZAS.
- Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2021). Diagnóstico de Crecimiento Inclusivo en Honduras. Junio 2021. De: <https://ies.unah.edu.hn/assets/Uploads/Diagnostico-de-Crecimiento-Inclusivo-HN.pdf>